Constancia Secretarial: Manizales, veintidós (22) de junio de 2022. A despacho de la señora Juez, informando que correspondió por reparto demanda ejecutiva singular radicada con el N.º 17001-40-03-011-2022-00348-00.

Sírvase proveer,

GILBERTO OSORIO VÁSQUEZ
Secretario

JUZGADO ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES

Manizales, veintidós (22) de junio de 2022

Se resuelve sobre la viabilidad de librar mandamiento de pago en la demanda ejecutiva singular de mínima cuantía instaurada por Cristian Camilo Gil Gallego contra Diana Patricia Pulgarín Álzate, radicada con el n.º 17001-40-03-011-2022-00348-00.

El Despacho se abstendrá de librar el mandamiento de pago deprecado por las siguientes razones.

Revisados el documento aportado como base de recaudo denominado contrato de transacción se advierte que dicho documento no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso para ser considerados como título ejecutivo.

Para resolver el asunto correspondiente, se debe indicar que para que una obligación preste mérito ejecutivo, debe reunir los requisitos señalados por la ley, es decir los establecidos en el artículo 422 del Código General del Proceso:

“ARTÍCULO 422. TÍTULO EJECUTIVO. Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.”

Ahora bien, en la norma *ibídem* se establece que, para que puedan demandarse ejecutivamente las obligaciones, éstas deben ser claras, expresas y exigibles. En este sentido, el proceso ejecutivo parte de la existencia del título base de ejecución, que por sí mismo sea plena prueba, pues con éste se pretende obtener el forzado cumplimiento de la obligación debida.

Acorde con ello, tal documento debe producir al fallador tal grado de certeza, que no sea necesario acudir a otros medios distintos a la mera observación, para que de él se desprenda, al menos en principio, una prestación insatisfecha, pues de las características propias de este tipo de procesos, es que no se tratan de discutir el derecho reclamado, por el contrario, al estar el mismo plenamente demostrado, se pretende obtener su cumplimiento.

Sobre este requisito, el tratadista Ramiro Bejarano Guzmán ha expresado: “(...) *Que el documento contenga una obligación clara, significa que tal prestación se identifique plenamente, sin dificultades, o lo que es lo mismo, que no haya duda alguna de la naturaleza, límites, alcance y demás elementos de la prestación cuyo recaudo se pretende (...) Que la obligación sea exigible tiene que ver con la circunstancia de que pueda demandarse su pago o cumplimiento, lo cual corrientemente ocurre cuando ha vencido el plazo o se ha cumplido la condición a la que estaba sujeta (...)*”.¹

Así pues, la base de todo proceso ejecutivo la conforma primordialmente la presencia de un título ejecutivo, es decir, no puede haber jamás ejecuciones sin que exista un documento con dicha calidad que la respalde.

Acorde con lo anterior, para que el contrato de transacción pueda tenerse como base del recaudo, debe reunir los requisitos necesarios para ostentar la calidad de título ejecutivo, sin embargo, en las condiciones que se pactó la transacción la obligación carece de exigibilidad en los términos demandados por el ejecutante y sobre todo carece de claridad.

Por su parte no es exigible la totalidad de la obligación, pues en el contrato de transacción se estableció el pago por instalamentos, pero no se pactó una cláusula aceleratoria del plazo, por lo que únicamente serían exigibles las cuotas en mora.

¹ Bejarano Guzmán, Ramiro, *Procesos Declarativos, Ejecutivos y Arbitrales*, Sexta Edición, Pág. 446

La providencia se fija en estado No. 107 del 23/06/2022. evv.

Además de la falta de exigibilidad de la totalidad de la obligación, el contrato de transacción carece de claridad, ya que sus cláusulas contienen información contradictoria respecto de la fecha y forma de cumplimiento de la obligación, pues en la cláusula primera se pacta que: “*Que la señora Diana Patricia Pulgarín Álzate a partir del día viernes 5 de febrero de 2022, hará consignaciones o transferencias mensuales de un valor de trescientos mil pesos*”, estableciendo la forma de pago por instalamentos mensuales con fecha de vencimiento el día 5 de cada mes, a partir de la fecha señalada y a continuación en la cláusula segunda se establece: “*Que no se cobraran los intereses causados a partir de la fecha en que se firma la presente transacción, a menos que la señora incumpla con los valores de los pagos o las fechas quincenales acordados*”; luego en la cláusula tercera repite: “*Que de no llevarse a cabo los respectivos pagos quincenales acordados*”.

En este sentido, tenemos que en el contrato de transacción se pacta el cumplimiento de la obligación en pagos periódicos mensuales pero también quincenales, por lo que se tiene una duplicidad en la fecha de exigibilidad; se insiste en que el precepto de claridad exige: “*que los elementos de la obligación estén consignados en el documento de manera inequívoca y que la descripción de las características de la prestación ofrezcan plena certidumbre al intérprete, lo que supone que los vocablos empleados sean comprensibles, tengan significado unívoco en el contexto y no sean contradictorios o incompatible entre sí*”².

En consecuencia, el documento allegado con la demanda no cumple con los requisitos esenciales establecidos en el ordenamiento jurídico, por ello no ostenta la calidad de título ejecutivo, lo que a su vez implica la imposibilidad de ejercer el proceso ejecutivo cambiario, como se explicó anteriormente.

Por último, no se reconoce representación judicial al abogado Camilo Andrés Ramos Rodríguez, toda vez que el poder aportado no cumple con el lleno de los requisitos necesarios, esto es, con la constancia de presentación personal de que trata el artículo 74 del Código General del Proceso, toda vez que el poder arrimado cuenta con unos sellos notariales, pero no fue aportada la constancia que dé cuenta de la presentación personal

² Rojas Gómez, Miguel Enrique, Lecciones de Derecho Procesal, Tomo 5 EL Proceso Ejecutivo, Pág. 83

por parte del mandante ante la Notaria Cuarta de Manizales.

Por lo brevemente expuesto, la JUEZA ONCE CIVIL MUNICIPAL DE MANIZALES

RESUELVE:

PRIMERO: Abstenerse de librar el mandamiento de pago deprecado en la demanda Ejecutiva Singular de Mínima Cuantía instaurada por Cristian Camilo Gil Gallego contra Diana Patricia Pulgarín Álzate, por lo expuesto en la parte motiva.

SEGUNDO: No reconocer personería judicial al abogado Camilo Andrés Ramos Rodríguez, para representar los intereses del demandante.

TERCERO: Ejecutoriada la presente decisión archívese el trámite.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE